ACTUACIÓN CONJUNTA DE LA POLICÍA FEDERAL Y LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Manelich CASTILLA CRAVIOTO*

Sumario: Introducción; I. Premisas constitucionales; II. La nueva *Ley de Seguridad Interior*; III. Disposiciones y protocolos en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal; IV. Práctica conjunta; Conclusiones; Fuentes consultadas.

Resumen ejecutivo

A partir de la *Ley de Seguridad Interior* y de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de reformas legales y de la creación de protocolos nacionales, se ha regulado un marco de actuación conjunta para las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales. Un tema central que puede presentar especiales dificultades para la coordinación que dicho marco dispone para ambos tipos de instituciones es el papel que cada una ha de jugar en el procesamiento del lugar de los hechos. La normatividad vigente parece señalar una distribución de funciones muy específica que, sin embargo, se encuentra con importantes retos en la práctica. Para que dicha coordinación sea efectiva, la experiencia de trabajo entre la Policía Federal y las Fuerzas Armadas es amplia en opciones: desde capacitación para la construcción de un lenguaje común, hasta la organización de células de trabajo interinstitucionales. Aunque se han tenido buenos resultados, aún queda mucho camino por recorrer.

Introducción

El reto de la seguridad es, cada vez más, un tema central en la agenda pública de México. El impacto que causa sobre la sociedad implica que ésta demuestre un mayor interés en discutirlo y sobre las mejores formas para garantizar protección y seguridad, así como para inhibir las conductas delictivas.

* Maestría en *Ciencias Penales* con especialización en *Ciencia Jurídico Penal* por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Cuenta con experiencia en seguridad pública y responsabilidad social empresarial desde el año de 1999. En el ámbito policial, se desempeñó como Coordinador Estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí, enlace ante la Oficina de la Naciones Unidas para el Crimen y la Droga en el proceso de evaluación de la institución, Titular de la División de Seguridad Regional, Ministro agregado de la Policía Federal en la Embajada de México en Colombia, primer Titular de la División de Gendarmería y ex presidente de AMERIPOL. Actualmente es Comisionado General de la Policía Federal.

Los retos que el tema plantea son mayúsculos y diversos e implican una serie de esfuerzos en una gama amplia de aspectos. La necesidad del fortalecimiento de las instituciones de seguridad, desde la ampliación del mismo estado de fuerza disponible, hasta el establecimiento de sistemas claros y robustos de carrera y profesionalización, son ya lugar común en todo análisis que se haga sobre la materia.

Recientemente, un aspecto relacionado con la estrategia a seguir ha cobrado especial relevancia: el de la colaboración entre fuerzas de policía y Fuerzas Armadas para el combate a la delincuencia. No es tema menor, por cuanto que tiene raíces constitucionales e importantes derivaciones relacionadas con temas tan sensibles como la protección de los derechos humanos.

El tema surge a la palestra a partir de decisiones ejecutivas que, ante la magnitud del problema atendido (tanto por la cantidad de recursos requeridos, como por el reciente acceso de grupos delincuenciales a capacidades tecnológicas y de violencia de alto impacto), resultaron en la necesidad de complementar tareas de seguridad y persecución de delincuentes con la participación de las Fuerzas Armadas, de forma conjunta con los cuerpos de policía del país. Retoma vigencia a partir de la iniciativa presidencial para dar orden y dotar de un marco normativo a dichos esquemas de

actuación, misma que ha resultado plasmada en una nueva *Ley de Seguridad Interior*.

«El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido intenso: desde actores de la sociedad civil que han manifestado abierta oposición, argumentando riesgos importantes traducidos en la posibilidad de generar abusos en el uso de la fuerza y vulneración de derechos fundamentales, hasta las voces de las autoridades, en todos los niveles de gobierno, que enfatizan la necesidad de sumar cuanto esfuerzo sea posible para frenar un problema que podría alcanzar inercias riesgosas.»

El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido intenso: desde actores de la sociedad civil que han manifestado abierta oposición, argumentando riesgos importantes traducidos en la posibilidad de generar abusos en el uso de la fuerza y vulneración de derechos fundamentales, hasta las voces de las autoridades, en todos los niveles de gobierno, que enfatizan la necesidad de sumar cuanto esfuerzo sea posible para frenar un problema que podría alcanzar inercias riesgosas.

Más allá de tomar una posición en tan interesante debate, cabe señalar que, hoy por hoy, nuestras Fuerzas Armadas, tradicionalmente concebidas en nuestro país como una fortaleza institucional, capaz de atender a la población civil en muy diversas situaciones de emergencia, se han convertido en actores centrales que han sumado sus capacidades a las fuerzas civiles para combatir grupos criminales que pueden representar verdaderas amenazas, no solo para los ciudadanos, sino para la paz, el orden y la gobernabilidad de la Nación.

Y resulta sumamente relevante hacer notar que dicho debate y tales definiciones ocurren inmersos en un proceso de transformación institucional de gran envergadura para nuestro país: la implementación de un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Dicha transformación ha implicado, no solamente reformas

constitucionales, legales y reglamentarias, sino la creación de todo un nuevo aparato normativo y la adaptación de las capacidades de las instituciones participantes: tanto de procuración e impartición de justicia como, de manera preponderante, de seguridad pública.

Así, nos encontramos, coyunturalmente, en medio de dos discusiones fundamentales en materia de seguridad en México. A la vez que desciframos la forma en que policías y Fuerzas Armadas habrán de unir fuerzas para preservar la seguridad del país y sus ciudadanos, se modifica el papel de las instituciones de seguridad pública, para jugar nuevos roles en el marco del Sistema de Justicia Penal.

Las claves para la resolución de las dudas que surgen en ambos esfuerzos pueden encontrarse en los detalles más concretos de la operación. Por ello, es menester atender, aún, a las particularidades más concretas.

De ahí la importancia de revisar ese nuevo papel que se ha conferido a las policías, el de ser primer respondiente y procesar el lugar de los hechos, a la luz de la necesaria coordinación que han de tener, en el nuevo marco de atribuciones, con las Fuerzas Armadas. Es este un tema que borda en la intersección de las dos discusiones mencionadas. Y lo hace en el corazón mismo de su puesta en práctica, si bien abreva de los elementos teóricos que han

impulsado las reformas normativas. Es ahí, en el detalle de la operación, del aseguramiento del lugar, de la preservación de la evidencia, del establecimiento de una adecuada cadena de custodia, que se esconde el diablo para poner dificultades en la búsqueda de la tan ansiada coordinación.

Es, por tanto, de relevancia fundamental, revisar, aunque sea de manera sintética, el marco que se ha desarrollado para lograr tal coordinación y una implementación efectiva y eficiente del nuevo marco de atribuciones para las instituciones de seguridad. Ese será el propósito del presente trabajo: hacer un breve repaso de los procedimientos que tenemos disponibles las policías y las Fuerzas Armadas para realizar una actividad que es piedra angular en el nuevo sistema de justicia penal, el procesamiento del lugar de los hechos. No hay pretensión de exhaustividad, sino tan solo de poner en la mesa algunos de los elementos principales que deben considerarse. En particular, aquellos que pueden ser origen de confusión al momento de delimitar, de manera precisa, una adecuada distribución de tareas.

I. Premisas constitucionales

La instauración de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio implicó una extensa gama de reformas y de creación de nuevos cuerpos normativos. Destaquemos tan solo un par de disposiciones constitucionales

que se encuentran íntimamente relacionadas con el tema que nos ocupa.

En primer término, debe señalarse la reforma al artículo 21 constitucional para dotar a las policías, junto con el ministerio público, de facultades, no solamente persecutorias, sino de investigación de los delitos. Ello es central para entender el papel que la reforma del sistema penal dio a las policías como primeros respondientes y que encuentra su principal materialización en el procesamiento del lugar de los hechos y el establecimiento de una adecuada cadena de custodia.

En segundo término, debe recordarse una norma que no es nueva en nuestra Carta Magna, pero cuya reglamentación a nivel legislativo había quedado rezagada hasta muy recientemente. Se trata de la fracción VI del artículo 89 Constitucional, que otorga al Presidente de la República atribuciones para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación».

Tanto de la redacción histórica de esta fracción, como de la exposición de motivos que fuera expuesta en el Congreso de la Unión con motivo de la adición a dicho texto

del concepto de “seguridad nacional” en 2004, se desprende que la Constitución faculta la disposición de las Fuerzas Armadas no solamente para la defensa exterior del país, sino para la preservación, en su interior, de condiciones de seguridad nacional. Y se desprende que la voluntad del constituyente entendió dichas condiciones de seguridad, no solamente como las provenientes de una amenaza extranjera, sino todas aquéllas que, independientemente de su origen, pudieran alterar las condiciones de orden y paz del Estado, así como atentar a sus elementos constitutivos: territorio, población o gobierno. De esta forma, se legitima la participación de las Fuerzas Armadas aún en casos en que grupos de la delincuencia organizada, por su tamaño y capacidad de violencia, pudieran poner en riesgo dichos bienes esenciales para el Estado. Es esta, pues, la norma que dota de constitucionalidad a la intervención de dichas fuerzas en apoyo al combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

No debe dejarse pasar, por la relevancia que tiene para el diferente papel que los textos legislativos han de otorgar a policías y Fuerzas Armadas, el hecho de que la Constitución, si bien faculta para la intervención militar en la preservación de la seguridad interior y, por tanto, en la persecución de delincuentes que atenten contra la misma, solamente otorga atribuciones

a las policías, junto con el ministerio público, para realizar labores de investigación de delitos. Esta idea dará orientación, tanto a la *Ley de Seguridad Interior*, como a los protocolos que se han expedido en la materia, para establecer la división del trabajo entre ambas clases de instituciones.

«No debe dejarse pasar, por la relevancia que tiene para el diferente papel que los textos legislativos han de otorgar a policías y Fuerzas Armadas, el hecho de que la Constitución, si bien faculta para la intervención militar en la preservación de la seguridad interior y, por tanto, en la persecución de delincuentes que atenten contra la misma, solamente otorga atribuciones a las policías, junto con el ministerio público, para realizar labores de investigación de delitos. Esta idea dará orientación, tanto a la Ley de Seguridad Interior, como a los protocolos que se han expedido en la materia, para establecer la división del trabajo entre ambas clases de instituciones.»

II. La nueva *Ley de Seguridad Interior*

Para regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el Ejecutivo presentó iniciativa al Congreso que resultó en la aprobación de la nueva *Ley de Seguridad Interior*. Este cuerpo normativo da marco a las funciones que Ejército, Marina y Fuerza Aérea habrán de realizar en temas como la persecución de delitos que pudieran poner en riesgo la paz y seguridad de la nación.

El artículo 11 de la citada Ley establece:

... Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la Seguridad Interior...

El precepto legal que antecede establece que las Fuerzas Armadas, en conjunto con autoridades federales (particularmente, la Policía Federal), deberán atender y reducir amenazas a la Seguridad Interior. En este contexto, deberán establecerse mecanismos que permitan lograr el objetivo encomendado, como el intercambio de información, operativos conjuntos, reuniones periódicas, coordinación en la implementación de dispositivos de seguridad y apoyo en caso de detenciones y aseguramientos, ya sea para puestas a disposición o en la

preservación y procesamiento de indicios.

La Ley en comento detalla la manera de ejecutar las diligencias correspondientes en el lugar de intervención, de la siguiente manera:

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

De esta manera, la Ley dispone que, al tratarse de la primera intervención en el lugar de los hechos, el papel principal de las Fuerzas Armadas, en caso de ser ellas la primera autoridad en el lugar, habrá de circunscribirse a las medidas mínimas necesarias para preservar dicho lugar, así como las de urgencia para la atención de heridos. El mandato es para que hagan del conocimiento del ministerio público, o de las policías, y aguarden el arribo

de dichas autoridades para el procesamiento del lugar.

«... las Fuerzas Armadas, en conjunto con autoridades federales (particularmente, la Policía Federal), deberán atender y reducir amenazas a la Seguridad Interior. En este contexto, deberán establecerse mecanismos que permitan lograr el objetivo encomendado, como el intercambio de información, operativos conjuntos, reuniones periódicas, coordinación en la implementación de dispositivos de seguridad y apoyo en caso de detenciones y aseguramientos, ya sea para puestas a disposición o en la preservación y procesamiento de indicios.»

III. Disposiciones y protocolos en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal

El artículo 132 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* establece que la policía tiene las siguientes obligaciones:

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, *realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios*. En su caso deberá dar aviso a la *Policía con capacidades para procesar la escena del hecho* y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;...

IX. *Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;*...

Se observa que, a partir de estas disposiciones, la policía puede, no solamente resguardar el lugar de los hechos, sino identificar y garantizar la integridad de los indicios, así como recolectar y resguardar los objetos relacionados con la investigación de los delitos.

Derivado de la necesidad de homologar la manera de ejecutar las diferentes actividades del policía y de quienes actúan como primer respondiente, se publican en el Diario Oficial de la Federación, en octubre de 2015, los siguientes protocolos:

- Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente,
- Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar y
- Guía Nacional de Cadena de Custodia.

Dichos protocolos establecen las diligencias que deben practicar, tanto las policías como las Fuerzas Armadas. El Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente refiere, en el apartado de definiciones, el concepto de *Primer Respondiente* que a la letra dice: «es la primera *autoridad con funciones de seguridad pública* en el lugar de la intervención».

Los Protocolos de referencia describen minuciosamente los lineamientos a seguir en caso de que en el lugar de intervención se lleve a cabo una detención derivada de la comisión de un delito en flagrancia, se encuentren indicios y se realice su procesamiento (previa orden del Ministerio Público), se prioricen (lo cual se llevará a cabo solo en caso de que las condiciones meteorológicas y demográficas representen un riesgo para los indicios) o de que se esté ante la presencia de hechos delictivos consumados (localización, descubrimiento o aportación de indicios y/o elementos materiales probatorios, sin materializarse una detención).

Asimismo, señalan que una vez que el primer respondiente actúa en el lugar de intervención, si requiere *apoyo*

para *preservar y procesar el lugar de la intervención*, deberá gestionarlo y coordinarlo, mientras realiza las acciones necesarias y toma las medidas pertinentes, hasta que arribe el policía investigador, el perito y/o la Policía con capacidades para procesar al lugar.

Las principales acciones del Primer Respondiente en el lugar de los hechos son las siguientes:

- **Acordonamiento:** La acción de delimitar el lugar, mediante uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados.
- **Detención:** Restricción de la libertad de una persona por parte de la autoridad, dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin demora a disposición de la autoridad competente.
- **Documentación:** Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar, mediante fotografía, video, narración y/o croquis simple.
- **Recorrer perimetralmente el lugar de intervención;** con el propósito de determinar los límites e identificar lugares conexos e indicios.
- **Priorización:** En *condiciones meteorológicas y/o demográficas* que representen riesgos para la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios, el *Primer*

Respondiente informará al Ministerio Público, que recolectará y embalará los indicios o elementos materiales probatorios. La *recolección* se realizará con los *recursos disponibles*, considerando las circunstancias de tiempo y siempre *privilegiando la seguridad personal*.

El Primer Respondiente deberá realizar la entrega - recepción formal del lugar de la intervención conforme al Informe Policial Homologado, el cual deberá contener como mínimo, el *registro de la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de intervención* bajo la responsabilidad del policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar. Después de formalizar la entrega, el Primer Respondiente deberá entrevistarse con el policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar, a efecto de *otorgar datos y pormenores de sus actividades*. En caso de que el policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente en el lugar de la intervención para realizar cualquier acto de investigación, se lo hará saber, y este último deberá prestar el apoyo requerido, quedando bajo su coordinación. De no requerirse el apoyo, le deberá indicar al Primer Respondiente que puede retirarse del lugar de la intervención.

Podrá requerirse el **apoyo del Primer Respondiente para el traslado de indicios** o elementos materiales probatorios. Cuando no exista en el lugar de los hechos policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar, **el Primer Respondiente realizará el traslado de indicios o elementos materiales probatorios al lugar que le indique el Ministerio Público.**

«El Primer Respondiente deberá realizar la entrega - recepción formal del lugar de la intervención conforme al Informe Policial Homologado, el cual deberá contener como mínimo, el registro de la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de intervención bajo la responsabilidad del policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar. Después de formalizar la entrega, el Primer Respondiente deberá entrevistarse con el policía de investigación, perito o Policía con Capacidades para Procesar, a efecto de otorgar datos y pormenores de sus actividades.»

En la práctica, es común que no exista en el lugar de intervención personal diferente al Primer Respondiente, por lo que es éste quien, en la mayoría de los casos, realiza el procesamiento de los indicios (previa orden del Ministerio Público), proporciona seguridad perimetral y prioriza indicios, de ser el caso.

Por su parte, la Guía Nacional de Cadena de Custodia establece que se debe procurar, en todo momento, la preservación del indicio, lo que se traduce en llevar a cabo acciones para asegurar, resguardar, proteger y mantenerlo, con el objeto de conservar las condiciones originales de recolección, evitando la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

Dicha Guía dispone, de manera específica, para los elementos de las Fuerzas Armadas, que deben «realizar las **actividades relacionadas con la preservación del lugar de la intervención, proporcionar seguridad perimetral, y en su caso, ejecutar el traslado y entregar los indicios o elementos materiales probatorios, en el lugar que se le indique por el Policía de Investigación o el Ministerio Público**».

Establece, igualmente, que si el perito y/o la Policía con Capacidades para Procesar *se encuentran imposibilitados para realizar el traslado*, éstos *emitirán* las *recomendaciones* para el manejo y traslado de los indicios o elementos

materiales probatorios, *al Personal Facultado para el Traslado, con el fin de garantizar la integridad de los mismos*.

Acerca de este traslado, la Policía de Investigación puede valorar si realiza o *solicita a cualquier institución con funciones de seguridad pública* u otra que cuente con medios, recursos e insumos adecuados, el traslado de indicios o elementos materiales probatorios, de acuerdo a la naturaleza, características y condiciones específicas de éstos. En caso de no encontrarse en el lugar la policía de investigación, la solicitud la realizará el coordinador de la Policía con Capacidades para Procesar el lugar de la intervención. El personal responsable del traslado, deberá atender las recomendaciones que en su caso emita el especialista.

IV. Práctica conjunta

La *Ley de Seguridad Interior*, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, los Protocolos Nacionales de Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar, así como la Guía Nacional de Cadena de Custodia, dan marco, de esta forma, a la manera en que han de actuar, conjunta y coordinadamente, policías y Fuerzas Armadas en el lugar de los hechos. De manera sintética, las normas parecen señalar con claridad que el papel de las Fuerzas Armadas habrá de ser el de resguardar el lugar de los hechos y hacer de conocimiento de la autoridad investigadora para su

intervención en el procesamiento de los indicios. La policía tiene las mismas obligaciones, pero cuenta con facultades adicionales para preservar, documentar y priorizar indicios, así como para auxiliar a la autoridad investigadora en el traslado de los mismos.

La teoría planteada de esta forma desde el texto constitucional pretende dotar de certeza en el cumplimiento de ciertos principios relativos al ámbito de atribuciones que la Carta Magna define para cada una de las instituciones participantes. Así, se mantiene el concepto de que las Fuerzas Armadas participan en tareas de preservación del orden para la seguridad interior pero, en principio, no investigan delitos, actividad para la que sí cuentan con atribuciones constitucionales las policías.

No obstante, cabría preguntarse si un deslinde de atribuciones tan riguroso tiene el riesgo de convertirse en un obstáculo para la adecuada coordinación. En los hechos, la colaboración entre la Policía Federal y las Fuerzas Armadas es una realidad cotidiana. Baste mencionar que, tan solo en 2017, realizamos, de manera coordinada, más de 500 puestas a disposición, resultando en más de 350 detenidos y numerosos aseguramientos de armas, droga, vehículos, hidrocarburo sustraído ilegalmente y equipo de radio y telecomunicación.

Ahora bien, ya se ha dicho que los Protocolos y Guía mencionados

definen al Primer Respondiente como la primera autoridad con funciones de seguridad pública que acuda al lugar de los hechos. Esta definición podría retornar a la discusión sobre si las Fuerzas Armadas, al participar en tareas de persecución del delito, son autoridades con funciones de seguridad pública. De ser así, estarían legitimadas y, más aún, obligadas, para realizar todas las funciones que al Primer Respondiente se le encargan.

Una interpretación integral, atendiendo a las disposiciones de la *Ley de Seguridad Interior*, así como a las normas constitucionales, permite inferir una distinción entre funciones de seguridad interior y funciones de seguridad pública. De esta manera, el Primer Respondiente solo podría ser la autoridad que, formal y materialmente, posea la calidad de institución de seguridad pública, excluyendo a las Fuerzas Armadas y limitándolas, por lo tanto, al resguardo temporal del lugar de los hechos, hasta en tanto ocurre la presencia del Ministerio Público, la policía de investigación, o la policía con capacidades para procesar.

En términos prácticos, sin embargo, existen muy diversos motivos que implican la necesidad de no dilatar el procesamiento de los indicios y el establecimiento de una adecuada cadena de custodia. Así, por ejemplo, desde los principios constitucionales relativos al debido proceso y a la inmediatez para poner a disposición, en el caso en que existan

detenidos, hasta la naturaleza misma del lugar y de los medios de prueba que en él se encuentren, pueden ser imperativos para descargar en el primer respondiente, cualquiera que sea la autoridad que tenga dicho carácter, una serie de actividades de inmediata y urgente resolución.

«Una interpretación integral, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, así como a las normas constitucionales, permite inferir una distinción entre funciones de seguridad interior y funciones de seguridad pública. De esta manera, el Primer Respondiente solo podría ser la autoridad que, formal y materialmente, posea la calidad de institución de seguridad pública, excluyendo a las Fuerzas Armadas y limitándolas, por lo tanto, al resguardo temporal del lugar de los hechos, hasta en tanto ocurre la presencia del Ministerio Público, la policía de investigación, o la policía con capacidades para procesar.»

La realización de operativos conjuntos que prevén la actuación de Fuerzas Armadas y autoridades policiales, específicamente la Policía Federal, paso a paso en la realización de acciones de persecución, detención y aseguramientos, ha brindado buenos resultados para la obtención de importantes logros, cumpliendo de manera estricta con el marco normativo. La organización de células de trabajo interinstitucionales, con presencia, tanto de las Fuerzas Armadas, como de la Policía Federal, de la policía de investigación, de agentes del ministerio público, personal de inteligencia e, incluso, en ocasiones, de peritos, personal jurídico y administrativo, es una estrategia que está rindiendo frutos. Así, por ejemplo, las Bases de Operación Mixta (B.O.M.), creadas, precisamente, para la atención de objetivos y problemática de alto impacto específica, o las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas (F.R.I.M.), que operan en el marco de la estrategia de atención a los cincuenta municipios prioritarios para el abatimiento de homicidios en el país. De manera similar, nuevas estrategias, como el Operativo Escudo Titán, son concebidas en un esquema de estrecha cooperación entre Fuerzas Armadas, Policía Federal, los gobiernos locales e instancias de procuración de justicia.

Ante las responsabilidades que el nuevo sistema penal confiere al primer respondiente conviene, sin embargo, reflexionar también sobre la necesidad de aglutinar funciones y consolidar

instituciones. Si bien a nivel constitucional pareciera interpretarse una distribución marcada de funciones, también es cierto que las obligaciones que se derivan del nuevo sistema penal implican que todas las instituciones participantes han de contar con las capacidades para brindar oportuna respuesta y cumplir adecuadamente con el rol de primer respondiente.

Para lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de dichas funciones y obligaciones, cabe preguntarse si es posible consolidar funciones que, en el arreglo institucional actual, se encuentran dispersas. Así, por ejemplo, vale la pena considerar la posibilidad de unir todas las funciones de investigación y de capacidades para procesar el lugar de los hechos en una sola corporación de policía.

En todo caso, el reto que tenemos las instituciones participantes en el nuevo sistema, en el presente y hacia el futuro, es, precisamente, lograr mayores estándares de eficiencia y de colaboración. Para ello, debemos avanzar en la homologación de criterios, anticipándonos, en lo operativo, incluso a los criterios de interpretación que los órganos jurisdiccionales habrán de realizar conforme el sistema adquiera carta de naturalización. Es importante capacitar a todos los operadores del sistema, en todos los niveles, y hacerlo de manera conjunta, a efecto de construir un lenguaje común que abra canales fluidos de cooperación

interinstitucional. Es fundamental fortalecer los mecanismos de intercambio de información, para no abrir espacios que permitan, bajo el amparo de la laguna legal o el vacío operativo, resguardos de impunidad. Y es imperativo fortalecer el trabajo en equipo, con orientación al resultado final de la misión, más allá del deslinde de la responsabilidad y del estrecho cumplimiento de la atribución.

«Ante las responsabilidades que el nuevo sistema penal confiere al primer respondiente conviene, sin embargo, reflexionar también sobre la necesidad de aglutinar funciones y consolidar instituciones. Si bien a nivel constitucional pareciera interpretarse una distribución marcada de funciones, también es cierto que las obligaciones que se derivan del nuevo sistema penal implican que todas las instituciones participantes han de contar con las capacidades para brindar oportuna respuesta y cumplir adecuadamente con el rol de primer respondiente.»

Conclusiones

La complejidad del problema de la seguridad y la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país obligan a repensar la forma en que las instituciones han de sumarse para alcanzar objetivos comunes en la preservación de la seguridad de los ciudadanos. La participación de las Fuerzas Armadas, en conjunto con corporaciones como la Policía Federal, en tareas de persecución del delito, rol que en épocas pasadas habría parecido fuera de lo común, hoy es prácticamente imposible de eludir. Su contribución en tan difícil tarea ha sido determinante para sostener la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad.

La búsqueda por mejores y más eficientes mecanismos de coordinación es una constante en el trabajo interinstitucional. En la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, la clave para la colaboración y la suma de esfuerzos se esconde en el más concreto y preciso detalle de la operación. El primer instante que detona todo el complejo mecanismo del nuevo sistema, el instante del aseguramiento del lugar de los hechos, es angular para la construcción de un caso que resulte exitoso al cabo del proceso. En ese instante medular, la cooperación entre instituciones debe ocurrir de manera clara, precisa y fluida.

El reto ha sido y es mayúsculo. Las instituciones de seguridad no debemos escatimar voluntades para

impulsar la capacitación de nuestros elementos, para revisar nuestros procedimientos de operación y para establecer buenos canales de comunicación interinstitucional.

La Policía Federal y las Fuerzas Armadas comparten las dificultades que el reto impone. Siempre referente de disciplina y patriotismo, de compromiso y de eficacia, las Fuerzas Armadas se han convertido en faro que fortalece con sus capacidades a la labor que desempeña la Policía Federal. Si México es el objetivo común, no existe esfuerzo que resulte menor para lograr el buen éxito de la misión.

Fuentes consultadas

Legislación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ley de Seguridad Interior.

Guía Nacional de Cadena de Custodia.